

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 102

O R D I N A R I A

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del jueves veintinueve de septiembre de dos mil once, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTAS

Proyecto de acta de la sesión pública ciento uno, extraordinaria, celebrada el miércoles veintiocho de septiembre de dos mil once.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

Asunto de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves veintinueve de septiembre de dos mil once:

II. 1. 62/2009

Acción de inconstitucionalidad 62/2009 promovida por Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, contra los poderes Legislativo y Ejecutivo y otras autoridades de la propia entidad federativa, por la invalidez del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en las porciones normativas que dicen: “como fundamento de todos los derechos de los seres humanos”; y: “desde el momento de su inicio en la concepción”. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.*

El señor Ministro ponente Franco González Salas expuso una síntesis de las consideraciones de su proyecto en cuanto sustentan los puntos resolutivos.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó estar a favor del proyecto, señalando que en el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, impugnado, se establece una jerarquía entre los derechos fundamentales, en la que se otorga al derecho a la vida el lugar preeminente sobre los demás, por ser su fundamento, lo que rompe el principio de interdependencia de los derechos humanos, ya que todos se ubican en un plano de armonización, lo que hace que opere el sistema previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

Indicó que al enunciarse en el párrafo segundo de la norma impugnada determinados casos en los que el aborto no es punible, cualquier otro supuesto de muerte al producto de la concepción debe ser sancionado penalmente, tomando en consideración que dicha lista de excusas absolutorias es taxativa, pues al nombrarlas se utiliza la disyuntiva “o”.

Señaló que las condiciones normativas referidas distinguen a la norma impugnada del artículo 7º de la Constitución de Baja California, que se analizó en el asunto anterior, y originan que aquélla sea inválida, tomando en cuenta que no es constitucionalmente admisible que un derecho, *per se*, se sobreponga a cualquier otro, siendo que ni en la Constitución Federal, ni en ningún otro cuerpo normativo pueden establecerse derechos absolutos.

Consideró que la enunciación taxativa de los supuestos en que la interrupción del embarazo no es punible hace que

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

el precepto impugnado otorgue al derecho a la vida un carácter absoluto frente a los demás derechos, dado que no permite la operatividad necesaria del sistema de derechos humanos previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, con lo que se resquebraja la supremacía constitucional y el Pacto Federal, contraviniendo la interpretación que este Alto Tribunal ha dado de forma explícita y consistente a la Norma Suprema, pues al resolverse la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, se indicó que desde la Quinta Época esta Suprema Corte ha sostenido que los derechos fundamentales o garantías individuales no son absolutos y admiten la posibilidad de modulación, siendo que esto fue destacado, incluso, por el voto de minoría respectivo, en el que se consideró que no es posible establecer jerarquías o prevalencias entre los derechos fundamentales al ser complementarios entre sí.

En atención a ello, partiendo de la base de que el Pleno ha sustentado de forma unánime que no es posible establecer jerarquías o prevalencias entre los derechos fundamentales, en tanto que no son absolutos y deben ser susceptibles de modulación, de acuerdo con circunstancias que no pueden fijarse *ex ante*, estimó que el Constituyente de San Luis Potosí vulneró los principios que rigen el sistema de protección de derechos humanos establecido en la Constitución Federal, al establecer el derecho a la vida

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

como preeminente y configurarle límites inflexibles, anulando la posibilidad de modularlo.

Señaló que la lista taxativa establecida en el párrafo segundo del artículo impugnado estableció la preeminencia inderrotable del derecho a la vida por encima de otros derechos fundamentales, como son el derecho a la salud y a la autodeterminación reproductiva de las mujeres en su modalidad de utilización de métodos anticonceptivos susceptibles de evitar que el óvulo fecundado se implante en el endometrio, como son el dispositivo intrauterino y la anticoncepción de emergencia, ya que la mujer, al no tener conocimiento cierto de que la concepción se verificó, se verá inhibida para ejercer su derecho al uso de tales métodos, siendo susceptible de ser sancionada penalmente.

Indicó que la fertilización *in vitro*, al implicar la realización de varias pruebas de laboratorio, con probabilidades de no lograr éxito en las primeras transferencias del óvulo fecundado al útero de la mujer, además de que de acuerdo con los protocolos médicos deberá seleccionarse entre múltiples óvulos fecundados y a desechar o congelar los no implantados, sería una práctica impedida por el artículo 16 impugnado, lo que pondría no sólo a la mujer que pretende ser madre mediante este método en un estado de incertidumbre jurídica, sino también a su pareja y al médico practicante, siendo ésta una valiosa e importante forma de reproducción y una solución para muchas parejas que no pueden procrear de manera natural.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

Estimó que la configuración normativa del precepto impugnado también incide en las personas que estipulan su voluntad de manera anticipada para morir con el menor sufrimiento posible, así como en las personas que acuden al auxilio para lograr este fin digno, atentando contra la dignidad humana, pues ésta no sólo se refiere al desarrollo de la vida sino a la posibilidad de decidir sobre el destino digno y final de ésta.

Agregó que el problema constitucional de la norma impugnada radica en que el Constituyente local pretendió cancelar la posibilidad de que esta Suprema Corte realice una interpretación que evite que los derechos configurados en términos absolutos vulneren, *per se*, otros derechos, al dotarla de un contenido que no da lugar a interpretación, además de que excluyó la posibilidad de que el legislador originario matizara la preeminencia del derecho a la vida frente a otros derechos fundamentales, al dictarle con precisión los únicos casos en que permite la prevalencia de otros derechos, con lo que se acota su libertad de configuración normativa.

Por lo anterior, concluyó que tanto la porción normativa del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, que señala: “Desde el momento de su inicio en la concepción”, así como la del segundo párrafo que prevé: “No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer, el embarazo sea resultado de una

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

violación o de una inseminación indebida, o de no provocarse el aborto, la mujer corra peligro de muerte”, son contrarias a los artículos 1º, 14, 16, 40, 41, 116, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Antes de dar continuidad al debate del asunto, el señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno los considerandos del primero al sexto, relativos, respectivamente, a la competencia, la oportunidad de la demanda, la legitimación, las causas de improcedencia, las violaciones al proceso legislativo y la síntesis de los conceptos de invalidez; los cuales se aprobaron por unanimidad de once votos.

El señor Ministro Cossío Díaz consideró que el artículo 16 impugnado otorga una protección preferente a la vida humana y, en particular, a la del producto de la concepción, mediante medidas de carácter penal, excluyendo cualquier posibilidad legal de interrupción del embarazo que no se trate de las que estableció expresamente.

Indicó que dicha disposición viola el derecho a la salud contenido en los artículos 4º constitucional, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que impide que las mujeres puedan abortar cuando esté en riesgo su salud, supuesto que, junto con el caso de que existan malformaciones en el feto, fue reconocido como justificación

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

válida para la interrupción del embarazo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso “KL vs. Perú”.

A consulta del señor Ministro Presidente Silva Meza, el Pleno acordó que la votación que se emitió y que se emitirá son en sentido definitivo.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó que reiteraría las razones que sustentaron su voto al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 11/2009, en el sentido de que el análisis sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, al tratarse de una disposición contenida en la Constitución de una entidad federativa, que reconoce un derecho humano, debe hacerse a la luz del sistema federal.

Por tanto, estimó que la invalidez del artículo impugnado deriva de que el órgano reformador de la Constitución local no puede alterar el contenido esencial de la Constitución Federal, reconociendo la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, y a partir de ahí, prever que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción.

Señaló que la consideración de la vida como valor fundamental de los derechos humanos desequilibra y contradice el orden constitucional, en cuanto que el alcance que plantea entre los diversos derechos no se encuentra reconocido por éste, dando preeminencia a la vida sobre cualquier otro derecho reconocido constitucionalmente, lo

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

cual fue la intención del órgano revisor de la Constitución local, que quedó expresada en el procedimiento de reforma respectivo. Señaló que con lo anterior se pretende imponer una visión única, sea ésta ideológica o moral, que no corresponde con la lógica de los derechos humanos en cuanto son relacionales en el sentido de que siempre deben armonizarse con otros derechos y libertades.

Indicó que si bien el segundo párrafo de la norma impugnada contiene supuestos en los que no se considera punible la muerte dada al producto de la concepción, con lo que podría pensarse que el Constituyente de San Luis Potosí ha establecido excepciones a la protección que confiere a la vida en respeto de otros derechos, ello no es así dado que, sobrepasando su competencia, en tanto que la tipificación de delitos corresponde al legislador ordinario local, prohibió a éste establecer algún otro supuesto en el que un aborto no sea penalizado, o regular cualquier otra conducta social vinculada con el derecho a la vida, como podría ser el derecho a morir dignamente.

El señor Ministro Pardo Rebolledo advirtió que el presente asunto tiene diferencias importantes con el que se discutió en la sesión anterior, señalando que aun a pesar de ello mantiene su posición a favor de la validez de los preceptos impugnados.

Señaló que su postura parte de que no interpreta los preceptos que han sido impugnados en el sentido de que

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

reconocen derechos absolutos y que establecen la prevalencia de algún derecho enfrente de otro, considerando que éstos deben interpretarse de conformidad con la Constitución Federal tomando en cuenta que el simple reconocimiento del derecho a la vida para los concebidos no nacidos no implica, *per se*, afectación a otros derechos, sin desconocer que en la práctica dicho derecho pueda entrar en tensión con otros derechos como la dignidad y libertad de las mujeres.

En este sentido, señaló que la Constitución Federal no puede prever todas esas hipótesis en las que pueden entrar en conflicto los derechos mencionados, pues ello excedería sus alcances, siendo que corresponde a los jueces ponderar cuál derecho debe prevalecer sobre otro a la luz de los casos concretos.

Precisó que el artículo reclamado reconoce a la vida humana y no al derecho a la vida como fundamento de los derechos, considerando que si bien esta declaración podría estimarse como el resultado de una técnica legislativa deficiente, ya que este tipo de pronunciamientos no son estrictamente jurídicos, ello no es motivo de inconstitucionalidad, además de que dicha declaración no implica que se dé prevalencia al derecho a la vida sobre cualquier otro derecho, pues en este mismo precepto se reconocen casos en los que no es punible privar de la vida al producto de la concepción, lo que no constituye un catálogo taxativo al no hacerse mención expresa de que ningún otro

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

supuesto podrá considerarse una causa de no punibilidad, ya que a partir de un ejercicio de ponderación puede llegarse a la conclusión de que, en el caso concreto, la libertad y dignidad de las mujeres está por encima del derecho a la vida del concebido.

El señor Ministro Aguilar Morales reiteró su posición en el sentido de que las definiciones de un derecho fundamental, como la que se establece en el artículo impugnado, no pueden estar sujetas a las variantes que establezca cada una de las Constituciones de los Estados de la República, dado que, como conceptos universales, los derechos fundamentales deben ser únicos y unívocos, por lo que sólo deben establecerse en la Constitución Federal, de ahí que los Congresos locales no cuenten con facultades para modificar la esencia de un derecho fundamental, sino sólo el Constituyente Permanente.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó que reiteraría su criterio externado al resolver las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 11/2009, en el sentido de que, en tanto la Constitución Federal no define cuándo inicia la vida, en uso de su libertad de configuración legislativa, los Congresos locales, al pertenecer a un sistema federal en términos de los artículos 40 y 124 constitucionales, cuentan con las facultades para definirlo, estimando que si bien es deseable que existiera uniformidad en este aspecto, lo cierto es que ello implicaría la desaparición del sistema federal.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

Precisó que la demanda que dio origen a la presente acción de inconstitucionalidad tiene dos vertientes distintas, que la diferencian de la relativa a la acción de inconstitucionalidad 11/2009, estableciéndose en una primera sección las consecuencias normativas de la reforma impugnada y, en una segunda, los conceptos de invalidez. Destacó que el promovente de esta acción de inconstitucionalidad indicó a este Alto Tribunal que sólo en caso de que comparta los alcances jurídicos que le dio a la norma impugnada, procediera al estudio de los conceptos de invalidez, considerando que el Constituyente local no estableció un mandato explícito a cargo del legislador ordinario de penalizar el aborto, por lo que la norma en cuestión no proscribía la posibilidad de que el legislador ordinario pueda en un futuro despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Indicó que el hecho de que el segundo párrafo de la norma impugnada enuncie los supuestos en los que el aborto no es punible no implica que la ponderación de la punibilidad del aborto quede al margen de la libertad de configuración normativa del legislador secundario.

Estimó que no podría sustentarse que la norma impugnada imposibilite que las mujeres usen anticonceptivos, o que se realicen inseminaciones *in vitro*, pues la Ley de Salud de San Luis Potosí prevé que la Secretaría de Salud, en materia de salubridad general, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las Normas

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

Oficiales Mexicanas, así como las leyes y reglamentos vigentes en el ramo de salud, siendo que existen dos Normas Oficiales Mexicanas que regulan el uso de métodos anticonceptivos como la “píldora del día siguiente”, además de que también la obliga a entregar a quienes lo soliciten una guía informativa acerca de las técnicas de reproducción humana asistida, indicándose que los servicios de salud reproductiva comprenden el derecho que tienen hombres y mujeres de obtener información sobre salud reproductiva y planificación familiar para prevenir embarazos no deseados, disminuir los índices de mortalidad materna y favorecer las posibilidades de tener hijos sanos.

Por otra parte, señaló que del segundo párrafo del artículo impugnado no puede desprenderse una prohibición expresa de despenalizar el aborto, sino que en él se prevé el resultado de una ponderación del derecho a la vida en relación con otros derechos, por lo que no se determina la preeminencia de aquél sobre todos los demás, sino que constituye sólo su punto de partida, pues únicamente puede establecerse qué derecho prevalece sobre otro ante un caso de colisión.

Indicó que no está fuera de la realidad que el derecho a la vida sea el derecho primigenio, ya que autores como Sergio García Ramírez han considerado que es el más esencial de todos los derechos, correspondiendo a la categoría de primera generación, y que la alusión al respeto a la vida abarcaría el reconocimiento del derecho a la vida

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

con carácter universal, la adopción de medidas para preservarlo, la remoción de obstáculos que se opongan a su eficacia, la ineficacia internacional de estos obstáculos, la provisión de garantías para la tutela del derecho, y la interpretación consecuente con el designio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, señaló que en la exposición de motivos de la reforma constitucional que abolió la pena de muerte se indicó que la vida es el patrimonio más valioso que tiene la humanidad y que el grado de civilización de las sociedades es directamente proporcional al respeto que en ellas se tiene por el derecho a la vida, además de que en el dictamen correspondiente se argumentó que la protección a la vida de un ser humano es considerada como la más elemental de las defensas, puesto que de la vida deriva todo el potencial de desarrollo y realización de la persona.

Señaló que la declaración en el sentido de que a partir del derecho a la vida surgen todos los demás derechos tampoco es incorrecta, ya que si no se está vivo, no se puede tener otro derecho, estimando que esto tampoco implica que el derecho a la vida tenga preeminencia respecto de los demás.

Por otro lado, manifestó coincidir con los argumentos por los cuales se estima que la norma impugnada no viola el Estado laico, señalando que estas consideraciones reiteran su posición en el sentido de que es el legislador local el que debe prever si sanciona o no el aborto, ponderando las

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

situaciones económicas, políticas y sociales que existen dentro de la comunidad en la que ejerce su competencia.

Señaló que sólo en un sistema centralista se impediría que los Congresos locales legislaran, como estimaran conveniente, respecto de cuándo se protege la vida, por lo que en un sistema federal, en uso de la libertad de configuración legislativa que se le concede, el Constituyente permanente de San Luis Potosí está facultado para configurar el derecho a la vida en la forma en que lo hizo, dado que no violentó la Constitución Federal ni los tratados internacionales, al no prohibir el acceso de las mujeres a la educación sexual, así como a ser asistidas en materia de planificación familiar y de reproducción asistida, máxime que ello está regulado en la propia normativa de la entidad.

A consulta del señor Ministro Presidente Silva Meza, el Tribunal Pleno acordó prescindir del receso y continuar con la discusión del asunto.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que los señores Ministros que se pronunciaron a favor del sentido del proyecto manifestaron estar en contra de sus consideraciones, pero coincidiendo en una parte esencial, sin que se haya aclarado cuál es ésta.

Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Comunidad Indígena Xákmok Ká- sek vs. Paraguay”, sostuvo que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

requisito previo para el disfrute de todos los demás derechos humanos, y que de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido en razón de dicho carácter, no siendo admisibles enfoques restrictivos de éste, lo que ya había reconocido en los asuntos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela” y “Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”.

Indicó que la relación entre la consideración anterior y lo previsto en el artículo 29 constitucional da sentido a la protección de la vida desde el momento de su inicio en la concepción, señalando que esta afirmación no la desmiente el proyecto sino que contemporiza con ella, pero sin acogerse totalmente al deber de proteger al producto de la concepción, pues un bien jurídico protegido no es una cosa.

En relación con la consideración de que una Constitución no puede contemplar normas penales, señaló que la Constitución Federal contiene valores, principios y normas ordinarias rígidas, estimando que si bien técnicamente la Constitución Federal no debería contener disposiciones del último tipo, éstas deben acatarse en cuanto forman parte de ella. Además, estimó que el segundo párrafo de la norma impugnada no es taxativo sino que más bien contiene una advertencia al legislador de no determinar la punibilidad del aborto en determinados casos, pudiendo éste prever otros casos en las normas secundarias.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia manifestó estar en contra del proyecto y por la validez de la norma impugnada. Señaló que el artículo impugnado no establece un derecho absoluto a la protección a la vida humana sino que simplemente reconoce a la vida como fundamento de todos los derechos, estimando que una cláusula que estableciera expresamente el derecho a la vida como absoluto sí sería inconstitucional.

En relación con la consideración en el sentido de que existe un derecho de la mujer al aborto, derivado del artículo 4º constitucional, señaló que el derecho a la libre planificación familiar se ejerce de forma previa al embarazo, sin que exista en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales un reconocimiento expreso del derecho a abortar, por lo que la permisión de la interrupción del embarazo corresponde a la libre configuración de las entidades federativas.

Respecto de la consideración de que la norma impugnada priva del derecho a morir dignamente, mencionó que ésta protege la vida en los mismos términos que lo hace la Constitución Federal, por lo que podría estimarse que la misma limitante opera a nivel federal. Asimismo, indicó que corresponde propiamente al legislador secundario establecer tipos penales, pero que ello no implica que dichas normas no puedan contenerse en las Constituciones, pues el que puede lo más, puede lo menos, señalando que en la Constitución Federal se tipifica el delito de enriquecimiento ilícito además

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

de que se establece la posibilidad de sancionar penalmente cualquier apartamiento de la Ley sobre Salarios Máximos.

Por otra parte, manifestó coincidir con los señores Ministros Pardo Rebolledo, Luna Ramos y Aguirre Anguiano en el sentido de que el párrafo segundo del artículo impugnado no cierra la posibilidad de que se amplíen los casos de no punibilidad del aborto, considerando que si en San Luis Potosí una joven mayor de doce y menor de dieciocho años incurriera en el delito de aborto, esta conducta no sería punible.

Finalmente, indicó que la norma impugnada no prohíbe los procesos de reproducción asistida y de investigación, estimando que la regulación de algunos de éstos corresponde a la Federación. Preciso que, en todo caso, la protección de la vida desde la concepción, a nivel de la Constitución local, adquiere rigidez mas no invariabilidad ya que el órgano revisor de dicha norma está en libertad de modificarla cuando lo estime conveniente.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas señaló que algunas de las intervenciones de los señores Ministros invitan a los habitantes de San Luis Potosí a no acatar la Constitución local, y a atender directamente a la federal, además de invitar a que las autoridades y los gobernados puedan violentar su propia norma constitucional, manifestando dudas respecto de qué situación guarda la

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

normativa aludida por la señora Ministra Luna Ramos con la Constitución local.

Señaló que con independencia de lo que derive del ejercicio de un control de convencionalidad, lo cierto es que la propia falta de certeza jurídica en relación con lo que dispone una norma que reconoce un derecho humano genera en el gobernado un efecto inhibitorio en relación con la conducta que pudiera desplegar a partir de ella, por lo que naturalmente se inclinará a evitar el ejercicio de ese derecho para no ser afectado por la arbitrariedad de la autoridad, estimando que si este efecto inhibitorio es suficiente, el derecho fundamental se torna nugatorio.

En este sentido, señaló que la norma impugnada, al ubicar el derecho a la vida como preeminente, genera incertidumbre, pues inhibe a las mujeres el ejercicio de sus derechos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que la Constitución Federal no se configura como receta de cocina, pues de otro modo no se requerirían tribunales constitucionales, de ahí que la interpretación constitucional no consista simplemente en repetir lo que ésta dice, sino en fijar sus alcances y armonizarla.

Reiteró lo que sostuvo en la sesión anterior en el sentido de que existe un derecho fundamental a la interrupción del embarazo, que no deriva exclusivamente del artículo 4º de la Constitución Federal, sino también de la

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

dignidad humana prevista en su artículo 1º y de la especial dignidad de la mujer, que deriva de ambos. Además, indicó que una Constitución local no puede interpretarse a partir de lo previsto en normas secundarias ya que son susceptibles de estimarse inconstitucionales.

Por otro lado, indicó que fuera de los casos en los que el aborto no es punible, previstos en la norma impugnada, cualquier otra excepción a la protección a la vida sería inconstitucional, porque las limitaciones a los derechos previstos en una Constitución no son enunciativas sino limitativas. Señaló que quienes están a favor de efectuar una interpretación conforme de la norma impugnada deberán ser consistentes en el sentido de que existen otras causas por las cuales la mujer puede interrumpir su embarazo sin que ello sea punible, al momento de resolver los asuntos respectivos.

La señora Ministra Luna Ramos cuestionó si la norma impugnada establece de forma tajante que reconocer el derecho a la vida del producto de la concepción implica sancionar con pena corporal a quienes interrumpen el embarazo, recordando haber demostrado en la sesión anterior que existen Constituciones que configuran el derecho a la vida en dichos términos y no determinan sancionar con pena corporal la interrupción del embarazo.

Señaló que en lugar de invitar a las personas en San Luis Potosí a que no cumplan con su Constitución, convoca

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

a leer el artículo impugnado tal cual está redactado, sin darle acepciones que no contempla, de manera que si no se da el alcance a la norma en el sentido de que reconoce el derecho a la vida como absoluto, no tiene por qué considerarse inconstitucional.

Indicó que la disposición impugnada no genera falta de certeza jurídica, ya que sólo protege la vida desde la concepción, en atención a que el Código Civil determina que el *nasciturus* tiene derecho a heredar o a ser reconocido por un padre. Señaló que la norma impugnada no enunció los casos en que no es punible la interrupción del embarazo de forma taxativa, de manera que en los demás supuestos la mujer ameritaría una pena corporal, ya que existen Estados en los que se prevé la protección de la vida a partir de la concepción sin que se establezca pena corporal por la interrupción del embarazo.

Asimismo, advirtió no haber señalado que la Constitución local deba interpretarse a la luz de normas inferiores, sino que en ejercicio de su libertad de configuración, el legislador secundario de San Luis Potosí determinó que la Constitución no impide el uso de métodos anticonceptivos, regulando esta materia a través de su legislación, además de que existen Normas Oficiales Mexicanas que él mismo se ha obligado a aplicar en aras de que las mujeres acudan a los métodos de reproducción asistida o anticonceptivos.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas precisó que lo único que manifestó fue que la manera en que estaba redactada en abstracto la norma impugnada generaba en el gobernado un efecto inhibitorio para ejercer sus derechos plenamente en materia de reproducción asistida, de uso de métodos anticonceptivos y de voluntad anticipada.

El señor Ministro Aguirre Anguiano sostuvo que el aborto no puede verificarse en razón de que el feto tiene malformaciones, porque se cometería un acto de discriminación por discapacidad, lo cual está prohibido por la Constitución. Señaló que en términos del artículo 1º constitucional, todos los *homos sapiens sapiens* cuentan con la misma dignidad, por lo que el óvulo fecundado tiene la misma dignidad que la mujer, sin que puedan existir dignidades prevalentes.

Precisó que existen tres artículos de la Constitución Federal que se refieren a la moral: el 6º, el 7º y el 94, considerando que la moral a la que se refirió el Constituyente alude a la que estaba vigente cuando se establecieron dichas normas, siendo que la única que regía era la judeocristiana. Finalmente, señaló que de considerarse que las entidades federativas no pueden regular derechos humanos, no tendría sentido que la Constitución Federal haya previsto las comisiones estatales de derechos humanos.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

El señor Ministro Presidente Silva Meza manifestó que desde la lectura que le da a la norma impugnada tiene un amplio aspecto de inconstitucionalidad, señalando que los señores Ministros que se han pronunciado por la invalidez de dicha disposición no han sentado criterios individuales sin ninguna conexión, tomando en cuenta los denominadores comunes de las participaciones.

Indicó que si la norma impugnada se lee en su integridad, relacionándola con lo expuesto en el proceso legislativo que le dio origen, podría determinarse que prevé una jerarquía absoluta y prevalente para la vida humana, generadora de un derecho a la vida, además de una ampliación de este derecho que contraviene lo previsto en la Constitución Federal, al no configurarlo en los términos que ésta señala, por lo que el Constituyente local desbordó su competencia.

Finalmente señaló que al enunciar los supuestos en que la interrupción del embarazo no es punible, la norma impugnada no admite la posibilidad de balancear el derecho a la vida con los derechos de las mujeres, por lo que ni en su diseño, ni es su construcción, la norma resiste un análisis de constitucionalidad.

El señor Ministro Franco González Salas manifestó haber convalidado el sentido de su voto por la invalidez de la norma impugnada. Señaló que si bien ésta podría tener diversas interpretaciones, lo que resulta incontrovertible es

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

que, al margen de que pudiera considerarse que el segundo párrafo de la disposición impugnada no fuera taxativo, lo cierto es que no deja de criminalizar el aborto.

Asimismo, manifestó coincidir con el señor Ministro Pardo Rebolledo en que los derechos humanos a la vida y la libertad reproductiva de la madre pueden entrar en conflicto en casos concretos, pero que ello no cambiara la naturaleza del precepto constitucional impugnado.

Sometidos a votación los puntos resolutivos del proyecto, los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza votaron a favor. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Ortiz Mayagoitia votaron en contra.

El señor Ministro Silva Meza declaró que se dejaban a salvo los derechos de todos los señores Ministros para que formulen los votos que consideren convenientes.

En virtud de que no se obtuvo la votación calificada de ocho votos para declarar la invalidez del artículo 16 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Pleno determinó desestimar la acción de inconstitucionalidad.

Sesión Pública Núm. 102 Jueves 29 de septiembre de 2011

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados y convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el lunes tres de octubre del año en curso, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las catorce horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.